FUNDAMENTOS

Hablar de "golpe militar" refiriéndose a la última dictadura que sufrió nuestro país es omitir una parte fundamental de quienes fueron los responsables de los años más oscuros y tenebrosos de la historia argentina. Las fuerzas Armadas impusieron el golpe de Estado y sostuvieron una brutal maquinaria de aniquilación, pero los autores intelectuales, los mentores, quienes consideraron que debía producirse no sólo una intervención sobre el Estado, sino sobre la Nación, fue un grupo de civiles pertenecientes al poder económico más concentrado que sustentaron ideológicamente la dictadura cívico-militar.

Prueba de que esta connivencia ya se venía gestando -antes del 24 de marzo de 1976- fue la visita que el presidente del Consejo Empresario Argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, le hizo al Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, en julio de 1975, para ofrecerle apoyo empresarial en caso de que una intervención militar pusiera fin al clima de caos e hiperinflación que reinaba en el país, obviamente alentado por estos mismos grupos económicos.

El terrorismo de Estado fue un plan sistemático de exterminio que necesitó de los uniformados para ponerlo en práctica, pero además requirió de una logística para implementarlo, a cargo de los grupos de poder económicos y empresariales más influyentes del país, muchos de ellos vigentes en la actualidad.

Un caso paradigmático fue el de la empresa siderúrgica Acindar, de la cual José Alfredo Martínez de Hoz era presidente y prestó parte de sus instalaciones para funcionar como centro clandestino de detención.

Otra de las empresas que financió el golpe fue la automotriz Mercedes Benz, proporcionando medios para garantizar la represión. Además, formó parte de la operación financiera del endeudamiento externo, con la que se enriqueció transfiriendo al pueblo argentino la deuda externa. Otro ejemplo fue la donación de un aparato de neonatología, que los militares utilizaron con las detenidas cuyos hijos luego serían apropiados. Justamente, el ex policía Raúl Lavallén, jefe de seguridad de la empresa, fue el apropiador de Paula Logares, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

La automotriz Ford fue también promotora de la dictadura, previamente había despedido a una gran cantidad de trabajadores, instalando un régimen de control

policial con el ejército en la propia planta, a modo de ensayo de lo que sería luego del 24 de marzo de 1976. Posteriormente a esta fecha instaló un centro clandestino de detención dentro de la fábrica, en el sector del quincho y del campo de deportes.

La empresa Ledesma es otra demostración de la complicidad durante aquellos años, actualmente su dueño, Pedro Blaquier, está procesado por su participación en la llamada "noche del apagón", durante la cual fueron 400 personas secuestradas y 30 desaparecidas, en julio del '76.

Otro dato a tener en cuenta es que las mencionadas empresas contrataban personal encubierto, con el fin de vigilar a los trabajadores y hacer informes de inteligencia de cada uno de ellos.

Del mismo modo, actuaron en complicidad empresas como La Cantábrica, Tensa, Astarsa, o la apropiación de Papel Prensa por parte de los grupos Clarín, La Nación y La Razón, entre otras.

Lamentablemente, sobran pruebas de la colaboración o el trabajo en conjunto entre los militares y los civiles, propietarios de las mencionadas empresas; estos últimos garantizaban logística, infraestructura, trabajo de inteligencia, dinero, vehículos, etc.

La incansable lucha y el compromiso de los Organismos de Derechos Humanos en busca de memoria, verdad y justicia, sumado a los enormes avances que asumieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner haciendo de los Derechos Humanos una política de Estado, lograron un avance inconmensurable en esta materia: la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió reabrir los juicios y condenar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, el acto simbólico -pero no por ello menos importante- de ordenar bajar los cuadros de los dictadores Videla y Bignone, el pedido de disculpas en nombre del Estado Nacional por haber callado 20 años de democracia, la recuperación de la ESMA como espacio para la memoria, etc.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que dan cuenta de la responsabilidad que asume este gobierno -en nombre del Estado argentino- en la búsqueda de la justicia y la verdad, por eso va más allá y pretende que se investigue la responsabilidad civil de los poderes económicos que concibieron, pergeñaron, dispusieron y sostuvieron el terrorismo de Estado en nuestro país.

Desde la Legislatura de la provincia de Río Negro, consideramos de gran utilidad -en la necesidad de reconstruir nuestra historia en un marco de justicia- la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, a través del Congreso de la Nación, que coordine y sistematice todas las investigaciones y constituya las formas de reparación posible.

Por ello:

Autora: Susana Isabel Dieguez.

Legislatura de la Provincia
de Río Negro

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

C O M U N I C A

Artículo 1°.- Al Honorable Congreso de la Nación, que vería con agrado la creación de una Comisión Nacional de la Verdad que investigue la complicidad de ciertos sectores económicos con la última dictadura cívico-militar de nuestro país.

Artículo 2°.- De forma.